



COMUNIDADES EN RESISTENCIA

Natalia Ferreira

Los relatos que en este informe se presentan reflejan las estrategias de resistencia de comunidades indígenas y campesinas de Paraguay frente a los problemas estructurales que crecen con el modelo agroexportador. Fueron redactados a partir de las experiencias de referentes de cada comunidad y registradas en el seminario “Comunidades en resistencia frente al extractivismo”. Participaron hombres y mujeres de las zonas de Infante Rivarola y Pykasú, Chaco; Colonia Independencia y Fassardi, de Guairá; Distrito de Lima, Sanguina Kué, 6ta. Línea, Sta. Rosa del Aguaray, Jaguareté Forest, Capiibary, de San Pedro; y Iro de Marzo y Altos, de Cordillera. Por precaución se mantienen en el anonimato sus identidades.

Este saqueo de la naturaleza y el plan de exterminio de formas de vida comunitarias, tiene resistencias importantes que crecen en las comu-

nidades en medio de la criminalización, el miedo y la pobreza, pero también de la solidaridad, de la creatividad, de la resiliencia, y del accionar político de hombres, mujeres y niños que luchan por su modo de vida y sus tierras.

Todos los casos reflejan comunidades que están siendo atacadas por el extractivismo en sus núcleos comunitarios básicos, ya sea rodeados de soja, avanzando en la minería, o contaminando los ríos, el aire y los bienes comunes de las comunidades, para lucro.

También observamos alianzas fuertes con algunas autoridades nacionales y locales que apoyan las causas de las comunidades, es decir, en muchas de las experiencias hay Concejales/as, Intendentes/as, Senadores/as, Diputados/as, con los que se estructuran estrategias tanto a nivel nacional, departamental o regional. Se encuentran posibles aliados

para construir alternativas entre la clase política, pero ello no es uniforme.

Otra constante es la difícil gestión comunitaria, porque es grande la necesidad de las comunidades. La expulsión que trae el modelo extractivista, la violencia que lleva a la gente a alquilar o vender sus tierras, dejar el territorio, abandonar sus costumbres, su práctica de agricultura, parece que no hay escapatoria, hay mucha desesperanza.

La fuerza de las comunidades y la organización es otra constante en los relatos, la generación de vínculos entre diversos actores, entre organizaciones campesinas, profesionales, ciudadanas, ecologistas. Están construyendo nuevos lazos para pensar alternativas.

Se evidencia también como relato común, la urgente necesidad de articulación para enfrentar este modelo. Por eso se observa la conformación de articulaciones nacionales, regionales, interdepartamentales, que con sus desafíos se fortalecen y avanzan hacia más conquistas, las cotidianas y las de largo plazo.

Y por supuesto, la constante: hombres y mujeres, niñas y niños que, con su lucha y la memoria de las luchas de sus comunidades, avanzan sin perder la alegría en el proyecto de unidad, de defensa de la vida y de una vida mejor para cada comunidad.

Lloran los bosques del Chaco mientras las comunidades indígenas resisten

La Comunidad Indígena Loma se encuentra ubicada en el Distrito de Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Boquerón, zona conocida como Infante Rivarola. Está a siete kilómetros del límite entre Paraguay y

Bolivia y la componen unas 57 familias. Es un territorio de 10.079 hectáreas de tierras fiscales que solo pueden ser transferidas a sujetos de la reforma agraria y que son de dominio ancestral de la Comunidad Loma, del Pueblo Guaraní Ñandeva. Según el relato de pobladores, en 1984 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) por Resolución 640/84 reconoció el dominio y la declaró Colonia Nacional Indígena, sin embargo hasta hoy sigue sin ser titulada a favor de la comunidad, la cual sufre todo tipo de amedrentamiento por parte de menonitas y brasileros que son responsables de la criminal deforestación del territorio ancestral. No cuentan con el Plan de Uso de Tierra (PUT) (que debe ser aprobado por el INFONA y la Licencia Ambiental, para lo cual es indispensable contar con los títulos de propiedad, que no poseen, ya que son tierras indígenas.

A finales del año 2018 decidieron volver a sus tierras para habitarla, producir, arraigarse y resistir. Solicitaron una nueva mensura para determinar los límites territoriales, pero no recibieron respuesta. Entonces, en febrero de este año pidieron una audiencia con un senador de la oposición (Frente Guasú), que tras una investigación informó a los líderes que el presidente del Indert nunca firmó la resolución para que se pudiera realizar la mensura. Gracias a las presiones, obtuvieron la firma necesaria y el proceso está encaminado.

Otra expresión de resistencia indígena es la de Pykasú, Alto Chaco, en la misma zona, con una sostenida disputa con ganaderos y ahora con brasileros también. Es un territorio de 600.000 hectáreas, que los pobladores afirman que sigue sin ser reconocido por

A finales del año 2018 decidieron volver a sus tierras para habitarla, producir, arraigarse y resistir

el Estado como tierra indígena y que es constantemente invadida por colonos para la extracción de carbón vegetal. Las 15 familias que conforman la comunidad son las responsables de custodiar, e intentar impedir el ingreso ilegal de extranjeros que buscan deforestar el territorio y extraer la mayor cantidad de recursos naturales posible en complicidad con las autoridades. El relato afirma que los invasores pretenden convencer a líderes comunitarios ofreciéndoles dinero, provistas, vehículos, lujos, y si bien aún no se han registrado atropellos violentos, la comunidad teme que las tensiones se vayan profundizando y que intenten atentar contra la vida de los líderes.

Los pueblos indígenas del Chaco tienen una larga historia de resistencia para defender sus tierras, territorios y la naturaleza, que el capitalismo transnacional ha destruido de manera vertiginosa en la última década. La negligencia de las autoridades nacionales ha permitido lo que los pobladores identifican como *la deforestación masiva más grande registrada a nivel mundial*, que ha destruido bosques nativos milenarios para destinarlos a establecimientos ganaderos, desentendiéndose del impacto ambiental.

Considerando que Paraguay tiene una cobertura boscosa de aproximadamente 16,75 millones de hectáreas –aunque la misma se ha ido reduciendo en las últimas décadas entre 2005 y 2010 donde la tasa media de deforestación fue de 179.000 ha/año– desde 2010 hasta 2019 se ha superado esa cifra¹. Los Departamentos del Chaco, sobre todo Alto Paraguay y Pdte. Ha-

yes, cuentan con la mayor cantidad de bosques nativos del país por eso son las zonas donde se visualiza el mayor avance del modelo agroexportador y el proceso de extranjerización, dentro del territorio paraguayo².

Defendiendo el Río Yhaguy

El río Yhaguy cruza por varias localidades del Departamento de Cordillera; arranca en Valenzuela, pasa por Itacurubí de la Cordillera, Santa Elena, Mbocayaty del Yhaguy, Caraguatay, San José Obrero, 1° de Marzo, Arroyos y Esteros, para desembocar en las aguas del río Manduvirá. Este cauce fluvial está en la mira de la empresa Agroganadera Piripucú S.A. cuyo propietario es Fernando Serrati, vinculado a la familia de un senador conservador (Patria Querida).

La empresa inició sus trabajos en la zona de Juan de Mena y San José Obrero entre 2015 y 2016. Debido a eso, la comunidad se organizó para conocer el proyecto y se enteraron que pretendía instalarse allí para dedicarse al cultivo de arroz y que emplearía una gran maquinaria para desviar el cauce del río. En San José Obrero, aguas arriba de la zona de 1° de marzo, los pobladores pudieron constatar que se había realizado un canal de más o menos 50 metros de ancho, 3 metros de profundidad aproximadamente, y unos 7000 mil metros de largo. La empresa formó un reservorio en la parte central de su propiedad, unas 350 hectáreas donde se junta el agua para el riego del arroz. Al constatar todas estas irregularidades, empezó la lucha de “Los

En San José Obrero, aguas arriba de la zona de 1° de marzo, los pobladores pudieron constatar que se había realizado un canal de más o menos 50 metros de ancho, 3 metros de profundidad aproximadamente, y unos 7000 mil metros de largo.

1 <http://guyra.org.py/informe-deforestacion/>

2 <https://www.ultimahora.com/el-chaco-paraguay-pierde-1033-ha-bosques-dia-n1131812.html>

Defensores del Río Yhaguy”, compuesta por dos organizaciones locales: la Contraloría Ciudadana y la Comisión de Campos Comunales.

Afirman los pobladores que con la complicidad de siete concejales municipales, la empresa avasalló el campo comunal, alambró el río y construyó un puente sin ningún permiso; además colocaron un portón que está siempre cerrado, violando leyes ambientales. Hay riesgos incluso de que las aguas se vuelvan tóxicas, porque utilizan veneno en sus cultivos para alcanzar mayor productividad. Aún no hay mortandad masiva de peces pero algunos pescadores afirman haber encontrado peces muertos en el canal principal.

“Los Defensores del Río Yhaguy” presentaron un Proyecto de Ley para proteger el río de los intereses extractivistas. En la Cámara de Senadores se logró la aprobación. Las trabas surgieron luego en la Cámara de Diputados pues los legisladores no cumplieron con los compromisos asumidos, ni siquiera el representante cordillerano perteneciente al PLRA, quien se había comprometido con las organizaciones, finalmente votó en contra del proyecto. Como no consiguieron los votos necesarios el proyecto volvió al Senado. El desenlace en esta cámara tampoco fue favorable ya que el debate se produjo con camaristas pertenecientes al nuevo periodo parlamentario, entre ellos Riera y Zavala, ambos con importantes intereses en el proyecto empresarial. Fue archivado el Proyecto de Ley, pero hay perspectivas de preparar un nuevo proyecto.

Una importante victoria para Cordillera

En las serranías del Departamento de Cordillera, entre las ciudades de Altos, Nueva Colombia y Loma Grande, hace 6 años empezó a gestarse un nuevo proyecto. Nadie sabía de qué se trataba pero corrían rumores de que se instalaría una ensambladora automotriz, lo que despertó la curiosidad comunal con la esperanza de que habría fuentes de trabajo para la población. En 2016, la empresa Archer S.A realizó una audiencia pública y fue entonces que dieron a conocer que trabajarían con carburo de silicio, aleación que se emplea para hacer armamentos, instrumental quirúrgico, blindados etc.

Los pobladores relatan que para obtener carburo de silicio se utiliza arena, que es mezclada con coque de petróleo. Agregan que el coque de petróleo “es el residuo del residuo del que sale del petróleo y que en otros países ya no se usa, por su alta toxicidad, produce lluvias ácidas y estropea el suelo. Lo traen acá, lo mezclan con la arena y lo queman. Para poner en funcionamiento los grandes hornos, emplean electricidad de muy alta potencia, que en nuestro país se obtiene a bajo costo. La empresa se ubicó donde pasa la red de alta tensión de 500 watts. Utilizan hornos de grandes resistencias, donde se carga el coque de petróleo y el polvo de arena, entonces la electricidad de alta tensión permite que estos compuestos se conviertan en una especie de lava, quema todo lo que hay y de ahí sale el carburo de silicio, que es la materia prima que la empresa comercializa en Brasil, acá no se industrializa nada”

En 2016, la empresa Archer S.A realizó una audiencia pública y fue entonces que dieron a conocer que trabajarían con carburo de silicio, aleación que se emplea para hacer armamentos, instrumental quirúrgico, blindados etc.

Cuando los hornos se encendían, la desesperación se generalizaba. Dependiendo de la dirección del viento, afectaba más o menos entre 6 y 7 km. a la redonda produciendo un olor nauseabundo insoportable. Además, provocaba acidez en el rostro y la garganta que hacía llorar a los niños y desataba crisis en los asmáticos, según relato de un poblador que vive en la comunidad hace 10 años. La salud de la comunidad estaba en peligro. Las plantas dejaron de tener frutas, no solo las plantas de los alrededores, incluso frutales que se encontraban a largas distancias. Históricamente ha sido un territorio fértil para los cítricos que crecen grandes y con buen sabor, pero a raíz de la contaminación, los mandarinos ya no tenían frutas o producían frutas muy pequeñas y casi sin aroma.

La planta industrial estuvo abierta durante un año, funcionando activamente un primer periodo de un mes y un segundo periodo durante más o menos 60 días. Luego los trabajos pararon gracias a la enorme presión de la comunidad que se organizó e impidió que los hornos sigan contaminando.

Cuando las autoridades no dieron respuesta, la presión de los vecinos no cesó, recurrieron a la prensa, realizaron manifestaciones inéditas llegando incluso hasta las viviendas de las autoridades para escracharlas con carteles, arrojando huevos, lo necesario para llamar la atención de la ciudadanía respecto al peligro para el ambiente. Hasta entonces la comunidad no había alcanzado ese nivel de cohesión organizativa.

La intendenta de Nueva Colombia, desde el principio acompañó a la organización porque su casa queda

cerca de la empresa, allí está su gente, sus animales, su pueblo. En principio no podía actuar porque la empresa no estaba en su distrito, pero luego revisando documentación, encontró que la empresa solicitó un seguro contra incendios y que eso correspondía a Nueva Colombia, ahí ella pudo accionar y luego tres o cuatro de distritos cercanos también lo hicieron. La comunidad celebró sorprendida la iniciativa de la intendenta, porque “parece casi una costumbre que las autoridades defiendan siempre los intereses de quienes más dinero tienen” manifestaron. Se formó una contraloría ciudadana que gozaba de mucha confianza.

La instancia más alta a la que llegaron fue la Organización Panamericana de la Salud. Se conformó una mesa de trabajo para estudiar el impacto en la salud de la comunidad y se constituyó un poder: autoridades, comunidad, ambientalistas y académicos. Y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tuvo que inclinarse a favor de la comunidad.

Ahora la planta está cerrada pero con intenciones de volver a empezar; están revisando los pasos jurídicos y estudios ambientales que permitan determinar el impacto ambiental para volver a trabajar. Y no está todo dicho. Pero en este momento los hornos no pueden funcionar gracias a la presión de las organizaciones locales.

Los grandes desafíos del Norte

Para hacer frente a los innumerables desafíos que supone para las familias campesinas el avance del modelo agroexportador, campesinas y campesinos del norte del país crearon

Para hacer frente a los innumerables desafíos que supone para las familias campesinas el avance del modelo agroexportador, campesinas y campesinos del norte del país crearon la Coordinadora Popular Campesina (CPC),

la Coordinadora Popular Campesina (CPC), en la que participan diversos sectores y donde se discute principalmente el modelo de producción agrícola. Activan en un frente de lucha por la reivindicación de la Tarifa Social de Energía Eléctrica, ahí también se acumula una fuerza muy importante que aglutina a diversos sectores. La invasión silenciosa de la soja los va expulsando de sus tierras. Esta misma realidad también se vive en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Las comunidades campesinas desaparecen.

Con mucho sacrificio se logró la ruta asfaltada desde Santa Rosa del Aguaray hasta Capitán Bado, algo positivo y negativo a la vez para la comunidad campesina. Y es negativo porque este camino asfaltado permite también el ingreso de sojeros y ganaderos que encuentran una población joven y tierras fértiles para el trabajo, pero sin embargo, significa sobre todo la expansión del modelo agroexportador.

Crean en la articulación de las fuerzas populares y saben que hay que trabajar con ese objetivo. Se articulan con quienes coinciden con ellos y están afectados por diferentes problemas, que lo enuncian como un solo problema y un solo enemigo, “el modelo extractivista y sus múltiples facetas”. Tienen que encontrarse y entenderse necesariamente, hacia una lucha y un compromiso que transforme nuestro país.

Un gran desafío es resistir a la incesante migración del campo a la ciudad y con ello, la realidad es que ya no recuperan los grandes latifundios, e inclusive pierden el territorio que habían ganado. La dimensión del desafío es

grande, porque el campesinado abandonó sus colonias y fue a las ciudades. Analizan que ese es el plan que tiene este sistema, y reconocen que para ello el gobierno emplea distintos métodos de represión, y más aún en la zona de Santa Rosa, satanizada en los últimos tiempos y militarizada con la supuesta excusa de controlar la presencia de grupos armados.

Afirman con certeza que “los militares son los guardianes de los sojales, de las vacas, de los ganaderos y protegen a los narcotraficantes”, así dibujan la realidad en la zona norte. Por ello esta Coordinadora amplió sus alianzas y trabaja de cerca con asesores de DDHH, con la Pastoral Social de la Diócesis de Concepción y San Pedro, y desde esos espacios involucran a la gente y llevan adelante la organización contra la militarización. Una acción importante es el proyecto para derogar la Ley de Seguridad Interna que se promulgó en 2013, presentada al Senado, proceso amplio en el que ya se realizaron dos audiencias públicas en 2017 y en 2018 en el Parlamento Nacional, para discutir el tema.

Hay diferentes frentes de lucha, todos difíciles y complejos; si bien es grande el desafío, son muchos los compañeros que resisten, que entienden, que interpretan, aunque dejan de mencionar que hay dirigentes que se corrompieron en el contexto de la necesidad y la desesperanza.

Sin embargo, sus relatos destacan a los heroicos compañeros luchadores, pues lo cierto es que en esa zona del país todo se ganó a fuerza de luchas. Ningún asentamiento campesino, de los más de 100 que hay en el Departamento de San Pedro, nacieron de la

Afirman con certeza que “los militares son los guardianes de los sojales, de las vacas, de los ganaderos y protegen a los narcotraficantes”

voluntad de las autoridades ni del gobierno, sino a través de la lucha frontal, a través de las ocupaciones, cárcel e incluso muertes. Es por eso que varios asentamientos llevan los nombres de estos compañeros/as en memoria de su lucha y resistencia. Relatan y destacan el caso de Pedro Giménez, en cuya memoria un asentamiento campesino a la altura del cruce Santa. Rosa, lleva su nombre.

Frente a un modelo gigante que busca su exterminio, las comunidades campesinas se organizan y luchan, convencidos que unidos y en resistencia, con la fuerza de su historia, van avanzando.

El avance de la soja en las tierras recuperadas de Jaguareté Forest

Jaguareté Forest queda a 50 km de Santa Rosa. Observando el mapa, los pobladores van reconociendo partes de la comunidad, nombran el Río Aguaray, identifican una comunidad indígena, Laguna Blanca, y luego van reconociendo los sojales, las tierras de Teixeira, que precisas tiene 22.000 hectáreas destinadas a la soja, las de Favero. Se observa cómo las comunidades están rodeadas de sojales. Mientras explican el mapa, enuncian que sus enemigos grandes se llaman Teixeira y Favero.

Lo cierto es que los sojeros necesitan expandirse, tienen que ir al Chaco o tienen que quedarse en esas zonas y desplazar lo que queda de comunidades campesinas. El Chaco requiere mayor inversión porque la tierra es menos fértil. Explican los pobladores que por esa razón Favero y Teixeira recurren a nuevas estrategias, están

financiando a pequeños productores campesinos, convenciéndolos de que planten soja. Esta es una realidad que ya sucede. Entre Calle 1 y Calle 2 ya plantaron unas 50 hectáreas de soja.

Los sojeros emplean diversas tácticas para acceder a las tierras campesinas. Según explican los pobladores: en la calle 1000 (Aguerito) donde los lotes son de 100 por 1.000 metros, equivalente a 10 ha., en 2 ha, cultivan sojas y permiten que los campesinos se queden con 8 hectáreas, el primer año las ganancias son exclusivas para el sojero, en el segundo año las ganancias son compartidas. En calle 2, les prestan dinero, les financian todo a los pequeños productores para que puedan plantar, depende de la situación. Pasa lo mismo en otras comunidades, como por ejemplo en Guahory.

Existen retrocesos también, como el caso de la comunidad San Pablo, que es una tierra recuperada a través de la lucha y ahora están plantando soja, financiados por los grandes sojeros. Relatan los cambios en el modus operandi, estancias grandes ahora están plantando soja, anteriormente no lo hacían pues se dedicaban más a la ganadería.

En Sanguina Kué, San Lorenzo, Primavera, Santa. Lucía y Rosario, aún hay un poco de bosque y después todo ya es una estancia. Los pobladores afirman que no se conocen las dimensiones ni los propietarios, y agregan que el sueño de los pobladores de Sanguina Kué siempre fue ocupar esas tierras y que lo han intentado mucho, desde hace tiempo, sin éxito. Identifican en su relato los desafíos: los dirigentes son comprados y éstos compran gente, los jóvenes optan por ir a

Lo cierto es que los sojeros necesitan expandirse, tienen que ir al Chaco o tienen que quedarse en esas zonas y desplazar lo que queda de comunidades campesinas.

la ciudad, la criminalización es grande. Pero siempre tienen ese sueño, y avanzan en la organización.

El mayor desafío es hacer comprender que los campesinos que plantan soja son tan pobres como ellos. Y esa comprensión supone un esfuerzo a la hora de planificar las luchas, para que se entienda que *no es una lucha de pobres contra pobres, sino una lucha contra un modelo que empobrece*.

Criminalización en Capiibary

Capiibary está al sur del Departamento de San Pedro, en la frontera con Caaguazú y Canindeyú, es una zona considerada muy conflictiva porque hay varias organizaciones sociales que le hacen frente al modelo agroexportador. El relato de los pobladores es claro, en Capiibary hace mucho que los sojeros avasallaron todo, desde Caaguazú por una parte y otra desde Canindeyú, y les rodean. En ese contexto hay una zona donde la población está resistiendo, y esa resistencia impide el avance de los sojeros. La organización y el trabajo consisten en que por lo menos no se alquile, ni se venda tierra a los brasileros. El hecho de que la zona tenga suelo arenoso y no sea apto para plantar soja, antes era un freno, pero últimamente de todas formas arrasan.

Los pobladores reconocen que es Favero quien más planta soja en Capiibary, en la zona de Tañy Karë, pero también hay otros, por ejemplo en 6ta Línea, Mcal. López, frontera entre Caaguazú y San Pedro, entre Yhú y Capiibary, en el medio de la comunidad, compró tierra un menonita, utilizó un prestanombre para comprar y está plantando soja. Los pobladores con-

firman que sobre toda ley ambiental, plantan soja ahí donde está la escuela y donde se encuentra el suministro de agua potable. Por eso la comunidad educativa se levantó contra la soja.

Igualmente, los compañeros afirman que no están pudiendo con todo, porque la comunidad no está unida, algunos grupos enfrentan el avance sojero, y otros grupos y gente, siguen callados. En ese sentido el intendente de Capiibary tiene un posicionamiento a favor de la salud y la vida de la comunidad y la mayoría de los concejales también. A raíz de eso sancionaron una resolución en la que prohíben el uso excesivo de agrotóxicos, sin embargo la respuesta es débil todavía.

La comunidad reconoce que el problema con los sojeros en 6ta Línea tiene más de 7 años. Ahí son pequeñas parcelas de 10 y 20 hectáreas, y hace 3 años hubo un enfrentamiento muy fuerte y se llegó al acuerdo de cultivar soja, con la condición de que les cedan una parte para plantar maíz. Importante es puntualizar que los sojeros cuentan con el apoyo de policías y fiscales.

La resistencia igual continúa; cuentan los pobladores que el año pasado, volvieron a intentar el cultivo de soja y hubo nuevamente enfrentamientos entre sojeros y quienes resisten al avance. Para construir el relato de la criminalización, se utilizan muchos recursos de modo a desprestigiar a la comunidad; en este caso se les atribuyó la quema de una sembradora, pero según los pobladores, es en el propio entorno de los sojeros desde donde se prendió fuego a la misma, y por ese hecho fueron imputadas 37 personas, hombres y mujeres campesinos.

La organización y el trabajo consisten en que por lo menos no se alquile, ni se venda tierra a los brasileros.

Ahora están en el proceso de investigación de este suceso, acompañados por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, pero este es un camino que implica para ellos muchos riesgos, conociendo además las fuertes probabilidades de que la justicia falle a favor de los sojeros.

Minería en Cordillera del Ybyturuzú

Guairá también tiene el problema del avance de la sojización, particularmente en el Distrito de Fassardi; un grupo de alemanes y la familia Llano tienen grandes extensiones de soja, según relatan los pobladores. También se inauguró el año pasado un frigorífico porcino, de los más grandes y modernos del Paraguay, en el límite entre Fassardi/Ava'i/Paso Jobái.

Pero además, Guairá tiene otro problema muy particular, que es la minería. Empezó en la zona de Paso Jobái, un distrito que limita con el Departamento de Caaguazú. Por su naturaleza, el trabajo con oro implica un problema grave a causa del cianuro y el mercurio que se utiliza para su extracción, por lo que incluso gran parte de la población sufre ya las consecuencias en su salud. El proyecto minero pretende llegar a la Cordillera del Ybyturuzú, que abarca prácticamente 6 distritos, con una extensión aproximada de 24.000 hectáreas. Los pobladores relatan que en Colonia Independencia ya hay experiencia de pequeños mineros que querían entrar al Ybyturuzú y se los echó; hay organizaciones sociales que están trabajando fuertemente en eso, es la zona que abarca la mayor superficie del Ybyturuzú, así como Villarrica y Eugenio A. Garay.

Buscando proteger el medio ambiente del Departamento, se sancionó la Ley 5399, que crea la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybyturuzú, para salvaguardar la Cordillera. Se utilizó esa categoría porque en el cerro ya hay población, por eso debe ser una Reserva de Recursos Manejados, pero contradictoriamente al Proyecto de Reserva, en el art. 6 de la misma Ley se manifiesta “que en caso excepcional el Ministerio de Obras Públicas podrá permitir la exploración y explotación de minerales dentro de la Cordillera” o sea que la Ley misma está diseñada para que se pueda explotar la Cordillera en busca de oro y otros minerales; el oro es el punto fuerte.

La comunidad vive en medio de rumores no oficiales que hablan de que ya se está entrando a la Cordillera y se saca oro. Al pie del cerro se están haciendo excavaciones con el fin de ver si hay oro, o sea que efectivamente ya se está alterando el territorio.

A fines del año pasado se creó una Coordinadora Departamental de Lucha por la Preservación del Ybyturuzú, pero lamentablemente en la práctica no funciona porque algunos de los representantes tienen intereses en el tema de la minería, mientras otros genuinamente buscan defender el ambiente y a la población. En esa iniciativa hay autoridades municipales con diferentes criterios, Miembros de las Juntas de los Distritos afectados, la Gobernación y la Junta Departamental del Guairá.

Una de las estrategias planteadas fue la modificación del art. 6 de la Ley de Recursos Manejados para cambiar su redacción. En vez de “casos excepcionales” reemplazar por “en ningún caso”.

Por su naturaleza, el trabajo con oro implica un problema grave a causa del cianuro y el mercurio que se utiliza para su extracción, por lo que incluso gran parte de la población sufre ya las consecuencias en su salud.

Rápidamente el senador Friedman (de Guairá) presentó este cambio en el Senado y se aprobó, pasó luego a Diputados, pero esta Cámara rechazó el Proyecto de Modificación, lo que dejó en evidencia que ellos sí quieren que haya explotación minera en el Ybyturuzú. Sin embargo, las fricciones por la derogación de este artículo dieron el triunfo a los pobladores del Ybyturuzú ya que en Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados, el plenario resolvió aceptar el Proyecto que modifica los artículos 6 y 7 de la Ley que declara como Área Silvestre Protegida a la Cordillera del Ybyturuzú, estas modificaciones cerraron la posibilidad de que la explotación minera continúe avanzando. Con mucho temor por parte de la población, la ley pasó al Poder Ejecutivo, sin embargo gracias al trabajo de pobladores, sociedad civil organizada y autoridades locales comprometidas, la ley fue promulgada.

¡Este triunfo enorme lleva consigo el desafío de seguir velando por la Cordillera y el Departamento y es ejemplo para todas las luchas!

Ocupación y resistencia en 6ta Línea, Lima

Cuentan los pobladores que Colonia Yvypé es una colonia campesina habilitada en 1975. En tiempos de Stroessner se habilitaban colonias cuadrículadas, por calles; ellos están en la 6ta línea, que es una calle, pero hoy está cerrada por un sojal. La comunidad anteriormente estaba compuesta por más de 36 familias de las cuales quedan 11.

Esta comunidad, como varias del Departamento de San Pedro, están marcadas por la lucha por la tierra. Vivió en su historia, tres atropellos

por parte de civiles armados, dos allanamientos violentos y un desalojo, tiene además 25 personas imputadas. La escuela fue cerrada en 2016 y reabierta por presión comunitaria en 2018, aunque inclusive hoy las clases se suspenden cuando hay fumigación. La soja también avasalló las fuentes de agua de la comunidad, contaminando el pozo artesiano, y las inmediaciones del centro de salud y de la iglesia.

En 2017, analizando la situación comunitaria decidieron conformar la Comisión Sin Tierra de Sexta Línea Yvypé, y a partir de ahí empezaron acciones concretas para enfrentar el avance de las plantaciones de soja. Por ejemplo, solicitaron a la Municipalidad la habilitación de un camino vecinal en la colonia, con la habilitación del camino empezaron los cultivos de alimentos para las familias. Se avanzó con la medición de la colonia y cuando llegaron los funcionarios del Sistema de Información y Recursos de la Tierra (SIRT) les dijeron “dentro de 2 meses ya deben terminar de hacer sus casas aquí”, construyeron casas, no fueron carpas, la mayoría tenía casas con techo de zinc y paredes de tabla, si eran pobladores antiguos tenían electricidad y los otros estiraban de ellos. Cuentan que la calle es angosta y ya no se camina por ahí a causa del sojal.

Después vino el desalojo. Hay fotos y videos en los que se ve a policías resguardando a los tractoristas para que corten la energía de la comunidad, hasta los caños cortaron; algunos tenían pequeños almacenes y les dejaron sin nada, dejaron todo pelado. Allí quedaron los pobladores en 20 hectáreas. Afirman que el asentamiento parecía una ciudad antes del desalojo

En 2017, analizando la situación comunitaria decidieron conformar la Comisión Sin Tierra de Sexta Línea Yvypé, y a partir de ahí empezaron acciones concretas para enfrentar el avance de las plantaciones de soja.

Hubo también un allanamiento y detuvieron a 27 compañeros, les llevaron presos, pero gracias a la organización salieron libres luego de 24 horas. Relatan que a un poblador antiguo de la zona, que no era ocupante, le dieron 9 meses de prisión domiciliaria porque el Fiscal le acusó de dar sustento a los ocupantes, es decir por prestar ayuda a sus vecinos. Incluso autoridades municipales fueron imputadas.

Tras el desalojo se ubicaron en el patio de la iglesia, y luego de una reunión decidieron volver a ocupar. Finalmente se realizó otro desalojo con quema de viviendas precarias, y de vuelta las detenciones, denunciaron incluso que fueron torturados psicológica y físicamente, a algunos jóvenes les trasladaron en un auto particular, en la cajuela, no en la patrullera, les tuvieron en el calabozo durante un día, sin agua y sin comida.

En los trámites con el SIRT invirtieron mucho tiempo y recursos, y en ese proceso de meses hubo extravío de documentos, cambio de autoridades y con ello el reinicio de toda la gestión que ya venía de años atrás.

Siguió la lucha y después levantaron una carpa de resistencia hasta donde llegó un juez para mediar, se colocaron en unas 20 hectáreas. Ahora esas hectáreas están llenas de producción agrícola, no hay un lugar libre y la decisión que tomaron los compañeros es que si vuelven a desalojarles van a pelear, porque el daño y perjuicio que les ocasionaron en el primer desalojo fue muy grande, porque destruyeron todo.

Además, desde la organización denunciaron la entrega de tierras a personas que no son sujetos de la reforma agraria. Narraron que después de

la denuncia, en diciembre de 2018, el actual presidente del INDERT volvió a adjudicar dos lotes, cada uno de 20 hectáreas, a dos menonitas, cuyo padre ya tiene ahí 130 hectáreas, ellos son hermanos que solicitaron la tierra y el actual presidente del INDERT les adjudicó. Manifestaron también que son los funcionarios quienes validan eso, dan vuelta algunas situaciones irregulares que hay.

Los pobladores sostienen que hasta ahora es lento el INDERT y que no tienen ningún resultado positivo. Manifestaron que sus autoridades les hacen de menos, piden audiencia con el presidente y les dicen “tranquilos ya está todo solucionado”, pero sin ningún resultado. Reconocen que la negligencia estatal es para que ellos dejen las tierras, aun así reiteran una frase que representa la crudeza de la resistencia campesina “van a matarnos únicamente para sacarnos de ahí, porque no vamos a salir”.

Comentaron también que ahora cuentan con autoridades municipales como el intendente, que busca hacer cumplir las leyes de la reforma agraria, el estatuto agrario, las leyes ambientales, es decir que vela por el bienestar de los pobladores, aunque tiene muchas limitaciones de parte del gobierno central. Contar con esa intención fue también fruto de la toma de conciencia de la comunidad, que votó mejor, como ellos mismo reconocen.

Siguen a la espera de la resolución del problema de las tierras en disputa que está en manos de los menonitas, además del cumplimiento de todas las leyes, principalmente las ambientales, pero están conscientes de que su lucha no es fácil, saben que ante cualquier

Comentaron también que ahora cuentan con autoridades municipales como el intendente, que busca hacer cumplir las leyes de la reforma agraria, el estatuto agrario, las leyes ambientales, es decir que vela por el bienestar de los pobladores.

conflicto, son ellos quienes van a ser imputados, saben porque la mayoría de la dirigencia tiene procesos abiertos con la justicia, como luchadores, conocen muy bien la dinámica de la criminalización.

Saben muy bien que la alternativa está en ampliar sus bases y articular al campesinado, y así generar alianzas regionales y nacionales, campesinas y con distintos sectores. La resistencia a la sojización es la realidad actual, pero el avance del modelo campesino es su futuro.

Todas son semillas de esperanza que crecen fuerte en cada comunidad, en cada persona, en cada organización, dejando el mensaje que la lucha es clara y es por la vida.

Experiencias diversas en defensa de la vida

Estos relatos nos ilustran que las experiencias de resistencia al modelo agroexportador, extractivista, tiene varios protagonistas y formatos, y que se desarrollan en comunidades con experiencias anteriores de lucha y también en otras donde la salud y la vida de las comunidades lleva a pobladoras y pobladores a organizarse por primera vez.

El recorrido por estas experiencias tan diversas, nos muestra que la resistencia obliga a las organizaciones a revisar modelos tradicionales de lucha para combinarlos con nuevos actores, con nuevas alianzas, y nuevas formas: ocupaciones, cierres de ruta, escraches en casas de autoridades, investigaciones, audiencias públicas, lobby, y alianzas con sectores de la sociedad civil, políticos, ONG, organizaciones barriales, organizaciones campesinas, de profesionales, etc. Todo nos muestra el complejo abanico de lucha.

Este sistema agroexportador que avanza de manera innegable a punta de inversiones estatales y privadas, impone devastación del ambiente y la naturaleza, así como de comunidades enteras de nuestro país, tanto en sus condiciones de vida material, como simbólica –su futuro y su historia–. Este sistema es una amenaza al campesinado como modo de vida, y las vidas y culturas de pueblos indígenas. Eso es lo que nos confirman todas las historias que recorrimos.

Frente a este modelo, tanto el sistema empresarial como los gobiernos de turno (con su modelo de desarrollo) y los medios de comunicación empresariales, han impuesto un sentido común: “no hay escapatoria, este es el único modelo posible”. Sin embargo, por sobre esa premisa absoluta, las experiencias narradas nos muestran triunfos concretos, comunidades que frenaron procesos de degradación del ambiente, que lograron detener el funcionamiento de fábricas, que lograron declaraciones de protección ambiental, leyes, decretos, ordenanzas, acciones en los diferentes niveles. Todas son acciones de resistencia, todas son respuestas urgentes, todas son afirmaciones que no hay vuelta atrás, hay que luchar contra la instalación del modelo extractivista, porque de lo contrario la vida se volverá inviable.

Todas son semillas de esperanza que crecen fuerte en cada comunidad, en cada persona, en cada organización, dejando el mensaje que la lucha es clara y es por la vida.